

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **MARIA YOLANDA DÁVILA GALLEGO**
Demandada : **PROTECCION S.A.**
Radicado : **05001 31 05 013 2019 00648 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – Pensión de Sobrevivientes causada por muerte de hijo.
Decisión : Confirma Sentencia Condenatoria
Sentencia No : 010

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**,¹ profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en la **Ley 2213 del 13 de junio de 2022**², que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Solicita se condene a PROTECCION S.A. al

¹ conformada por las Magistradas **NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente.

² “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, mesadas causadas desde el 22 de abril de 2018, indexación, intereses moratorios, condenas ultra y extra petita, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el hijo de la demandante Andrés Julián Monsalve Dávila falleció el 22 de abril de 2018; era soltero, no tenía hijos ni cónyuge o compañera permanente y lo que devengaba, lo aportaba para la manutención y sostenimiento del hogar; el padre del causante falleció en el año 2011.

Respuesta de la Parte Demandada:

PROTECCION S.A., a través de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones y formuló en su defensa las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe, prescripción, compensación, afectación de la sostenibilidad financiera del sistema, innominada.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín**, condenó a PROTECCION S.A. a pagar a la señora la pensión de sobrevivientes a partir del 22 de abril 2018, correspondiendo por concepto de retroactivo la suma de \$32.168.076 y continuar pagando a partir del 1° de abril de 2021 la mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, que se

incrementará anualmente conforme los mandamientos legales sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre; condenó a la indexación; autorizó los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud y absolvió de las demás pretensiones; no impuso costas.

Recurso de Apelación apoderada de la demandante:

Interpone recurso de manera parcial para que se condene en costas ya que la demandante incurrió en unos gastos que conllevan a la condena por este concepto; en cuanto a los intereses moratorios, la petición de la pensión fue radicada el 19 de julio de 2019 y si la demandada encontró que la petición estaba incompleta o debía pedir documentación adicional, debió hacerlo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes conforme lo dispone la Ley 1755 de 2015, término que no se cumplió porque lo hizo el 6 de agosto de 2019.

Recurso de Apelación apoderada PROTECCION S.A.:

Solicita se revoque la sentencia, al no demostrarse la dependencia económica de la demandante respecto a su hijo fallecido, ya que no es cierto lo que manifestó al rendir interrogatorio de parte, siendo los testigos de oídas; la dependencia económica debe ser subordinante, sin que la simple ayuda económica pueda entenderse como tal. Interpone el recurso en cuanto al retroactivo, manifestando que no tuvo la oportunidad de revisar la liquidación del Despacho. Se opone a la indexación, señalando que los fondos de pensiones son patrimonios autónomos compuestos por las cuentas de ahorro individual de cada uno de los afiliados que llevan implícitamente la actualización de la moneda.

Alegatos de conclusión:

Los apoderados de la demandante y PROTECCION S.A. reiteraron argumentos expuestos en Primera Instancia.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en verificar si la demandante María Yolanda Dávila Gallego, acredita el requisito de la dependencia económica, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del hijo Andrés Julián Monsalve Dávila; de ser procedente el reconocimiento de esta prestación, se examinará si hay lugar a modificar el valor del retroactivo y si debe revocarse lo referente a la indexación. En cuanto al recurso de la parte

demandante, se examinará si hay lugar a condenar a PROTECCION S.A. a intereses moratorios y costas.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, confirmar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:

En lo referente a que no se demostró la dependencia económica de la demandante respecto a su hijo fallecido, tenemos que:

Está acreditado que el causante Andrés Julián Monsalve Dávila falleció el 22 de abril de 2018, como se desprende del registro civil de defunción (folio 25 archivo 01), de manera que la normatividad aplicable es la establecida en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual establece que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste, veamos:

“...ART. 74.—Modificado. L. 797/2003, art. 13. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente ~~de forma total y absoluta~~ de éste...”.

En lo relativo a la dependencia económica, la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006, declaró inexecutable la expresión “de forma total y absoluta” contenida en el literal d) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, precisando una serie de criterios que permiten determinar si una persona es o no dependiente de otra, a partir de la valoración del denominado mínimo vital

cualitativo, esto es, una serie de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular; explicando que no es determinante para concluir que hay independencia económica: devengar el SMLMV, una asignación mensual o un ingreso adicional, ni recibir otra pensión, ni los ingresos ocasionales, ni poseer un predio; veamos:

“...Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.

2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.

3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.

4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.

5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.

6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica...” (Negrillas fuera de texto).

Sobre la dependencia económica, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en **Sentencia SL102 de 2019 Radicado 70248**, reiterando su jurisprudencia indicó que **la dependencia económica** requerida por la Ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: **ser cierta y no presunta, regular y periódica** y las contribuciones deben ser **significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios**, de manera que se constituyan en un **verdadero soporte o sustento económico**.

En **Sentencias SL4025 de 2018 Radicado 70309, SL6558 de 2017 Radicado 48429, SL6390 de 2016 Radicado 48064**, indicó que sólo puede ser definida y establecida en cada caso concreto, **no descartando ingresos familiares adicionales a los del afiliado fallecido**; advirtiendo que aunque **no se exige una dependencia total y absoluta, no cualquier ayuda suministrada a los familiares puede ser prueba determinante**

para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, ya que **el propósito del Sistema de Seguridad Social, es amparar a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba en forma real a mantener unas condiciones de vida determinadas**; explicando que debe existir un grado de dependencia, identificado a partir de la falta de autosuficiencia económica y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos que aportaba la persona fallecida.

Así mismo, en **Sentencias SL156 de 2019 Radicado 68250 y SL2845 de 2018 Radicado 62289**, reiterando su jurisprudencia, precisó que **no es dable desvirtuar la dependencia económica de los padres del afiliado fallecido por razón de contar con otros ingresos**. Igualmente, en **Sentencia SL9196 de 2017 Radicado 52233**, precisó que **la dependencia económica no puede tener la connotación de exigir a los progenitores un estado de pobreza absoluta o indigencia**, pues lo cierto es que así tengan un ingreso o patrimonio propio, si no son autosuficientes y dependen de la ayuda económica del hijo, podrán acceder a la pensión de sobrevivientes.

En el asunto analizado, nos encontramos con que:

La señora María Yolanda Dávila gallego, al rendir interrogatorio de parte, refiere que en el pasado tuvo una tienda, pero tuvo que dejarla por motivos de la violencia, siendo su hijo Andrés Julián, quien asumió todos los gastos del hogar desde que cumplió la mayoría de edad; de su trabajo como carnicero devengaba un salario de \$1.200.000, con el cual sufragaba todos los gastos del hogar del cual también hacía parte su madre (abuela del causante); aparte de lo que su hijo aportaba, no recibía ningún tipo de ingreso económico.

Lo anterior es corroborado por los testigos Luis Aníbal Montoya Présiga, Tatiana Dávila Areiza y Rosa María Gutiérrez Chavarría, cuyas declaraciones se observan espontáneas, objetivas e imparciales. Luis Aníbal Montoya Présiga y Rosa María Gutiérrez Chavarría, con conocimiento de los hechos por la relación de vecindad con la demandante, relatan que el padre del causante murió hace varios años; ella tuvo una tienda que se acabó, sin conocersele después otro trabajo o algún tipo de ingreso, pensión, renta, subsidios, ayudas del Estado o propiedades; el joven Andrés Julián Monsalve Dávila trabajaba como carnicero, asumiendo los gastos del hogar y velando por la manutención de su madre ya que era él quien trabajaba en la casa y no tenía pareja ni hijos. La señora Tatiana Dávila Areiza, sobrina de la demandante, manifiesta que el esposo de la demandante falleció hace mucho tiempo; cuando era niña le conoció a su tía un almacén que ya no tenía para la fecha del fallecimiento de Andrés Julián, siendo éste, el único que trabajaba en el hogar, laborando como carnicero toda vez que la señora María Yolanda Dávila Gallego cuidaba de la abuela, sin tener bienes o ingresos económicos aparte de la ayuda del causante quien era el que pagaba todas las obligaciones en la casa.

Las afirmaciones de los testigos guardan consistencia con las declaraciones extraprocesales efectuadas ante notario por Luis Aníbal Montoya Présiga y Rosa María Gutiérrez Chavarría, quienes en ese momento manifestaron que la demandante “...no tiene propiedades, no labora, no tiene ayudas económicas, nunca ha laborado, el compañero permanente VÍCTOR MONSALVE HENAO falleció hace 8 años, y el hijo ANDRÉS JULIÁN MONSALVE DAVILA (...) velaba en un todo y por todo, le daba alimentación, vestido, transporte, vivienda, vivían bajo el mismo techo, ANDRES JULIAN ni tenía compañera permanente, tampoco hijos...”.

La apoderada de PROTECCION S.A. demerita la credibilidad de la declaración de la demandante por decir que los ingresos de su hijo eran de \$1.200.000, pero en la historia laboral se evidencia que devengaba un salario mínimo; que los gastos del hogar ascendían a \$900.000 aproximadamente, sin discriminar lo correspondiente por concepto de servicios, alimentos o vestuario, no siendo lógico que luego restar lo gastos personales que tenía el causante, le alcanzara para correr con todos los gastos de la casa; además de no ser cierto que el causante le empezara a ayudar desde los 18 años de edad.

Al respecto, cabe indicar que **la historia laboral solo refleja la base sobre la cual se hacen las cotizaciones, constituyendo un mero indicio de los ingresos del trabajador y no una prueba de lo realmente devengado.** El que la señora María Yolanda Dávila Gallego omitiese detallar los gastos del hogar para saber si al causante le alcanzaba el salario para mantener a su familia, resulta irrelevante a la luz de la prueba recolectada, la cual resulta convincente para concluir que **aparte de lo que Andrés Julián Monsalve Dávila le proporcionaba, no tenía ningún ingreso económico para garantizar su subsistencia y vida en condiciones dignas; de manera que los aportes del causante no eran para ella una simple ayuda económica, sino que configuraron una real y efectiva dependencia económica.** De otro lado, se observa que Andrés Julián Monsalve Dávila nació el 19 de julio de 1994 conforme se observa en la copia del registro civil de nacimiento (folio 23 archivo 01); la historia laboral muestra que inició su vida laboral en julio de 2013, esto es, próximo a cumplir los 19 años de edad, por lo que no es desproporcionado o irrazonable, que la demandante hubiese expresado de manera natural y espontánea que su hijo le empezó a ayudar a partir de la mayoría de edad; razones estas por las cuales no se acogen los argumentos de la

apoderada de PROTECCION S.A., confirmándose la decisión que condena al reconocimiento y pago de la pensión solicitada.

La apoderada de la demandada interpone el recurso de apelación frente al retroactivo manifestando que no tuvo la oportunidad de revisar la oportunidad de revisar la liquidación del Juzgado y establecer si el monto al que se condena es o no el que corresponde; bastando indicar que esta Judicatura efectuó el correspondiente cálculo, teniendo en cuenta que se trata de una mesada pensional equivalente al salario mínimo liquidada desde la fecha del fallecimiento -22 de abril de 2018- hasta el mes de marzo de 2021, inclusive, incluyendo las mesadas adicionales de diciembre causadas en dicho periodo, obteniendo, al igual que la *a quo*, la suma de \$32.168.076, sin que haya lugar a modificar la condena en este aspecto.

En lo que tiene que ver con la indexación, la apoderada de PROTECCION S.A., se opone a que se condene por este concepto, manifestando que los fondos de pensiones son patrimonios autónomos compuestos por las cuentas de ahorro individual de cada uno de los afiliados que llevan implícitamente la actualización de la moneda. Sobre el particular, debe precisarse que **la indexación de las mesadas causadas de manera retroactiva, simplemente representa la actualización del valor adquisitivo que tuvieron esas mesadas debido pérdida del valor adquisitivo de la moneda**; esta corrección monetaria **no ha de confundirse con los rendimientos que genera el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual** y que deben ser garantizados al afiliado por parte de la administradora de pensiones dentro del RAIS; así lo explicó la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL4660 de 2020 Radicado 80773, veamos:

“...los rendimientos mínimos de los dineros depositados en la cuenta personal del afiliado en el RAIS son distintos de la indexación que debe pagarse sobre las sumas adeudadas por mesadas o diferencias pensionales que no fueron sufragadas en su oportunidad, de manera tal que, no es dable confundir o equiparar las consecuencias tanto jurídicas como económicas derivadas de dos hechos diferentes.

En efecto, la rentabilidad mínima es una garantía que tienen los afiliados a los fondos privados de pensiones según lo dispuesto en el literal e) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, cuyo reconocimiento y pago dependerá de que el afiliado cuente con sumas de dinero en su cuenta de ahorro individual, mientras que la indexación sobre las mesadas a favor del pensionado tiene su origen es en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, por manera que, responden a fenómenos completamente distintos.(...)

(...) una de las características esenciales del régimen de ahorro individual -- y que lo diferencia del de prima media--, es que el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo, en principio, propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, que es completamente independiente del patrimonio de la entidad administradora (...)

(...) El artículo 101 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 52 de la Ley 1328 de 2009, señala que **la totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los fondos pensionales, una vez aplicadas las comisiones respectivas, serán abonados en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados (...)** Normativa que, además, dispone que estas sociedades deban garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima (...)

(...) **Muy por el contrario, la indexación lo que persigue es la actualización del valor de unas mesadas pensionales que, aunque se causaron, no se pagaron oportunamente.** (...)

(...) **Así las cosas, no es dable homologar los rendimientos que deben reconocerse a los afiliados --por tener una cuenta individual de ahorro pensional-- en los términos expuestos, con la actualización de las mesadas adeudadas, cuyo valor se ha visto afectado por el transcurso del tiempo...**”

En estos términos, se confirmará la condena por concepto de indexación.

Recurso de Apelación apoderada de la demandante:

Solicita se condene a los intereses moratorios, teniendo en cuenta que presentó la solicitud de la pensión el “19 de julio de 2016” sic; la AFP requirió al apoderado de la demandante para que completara la documentación el 6 de agosto de 2019, incumpliendo así con lo establecido por la Ley 1755 de

2015, la cual contempla un término de diez (10) días siguientes a la radicación de la petición, para que la autoridad requiera al peticionario. Al respecto, es de tener en cuenta que los intereses moratorios se rigen por lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conforme el cual, se causan en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, que en el caso de la pensión de sobrevivientes es de dos (2) meses **después de radicada la solicitud**, según lo contempla el artículo 1° de la Ley 717 de 2001. En el asunto bajo examen, **el apoderado de la demandante remitió la solicitud de la pensión de sobrevivientes a PROTECCION S.A. a través de correo electrónico el día 19 de julio de 2019** (folio 32 archivo 01). La AFP, mediante correo electrónico del mismo día, **le confirma el recibo de los documentos, pero advirtiéndole que entrará en un proceso de revisión para validar si se ajustan a los requeridos e indicando: “...la recepción de esta documentación no constituye una radicación en firme de tu solicitud. La radicación formal solo se logra una vez se verifique que los documentos están completos y correctos...”**. En correo electrónico posterior del 6 de agosto de 2019, el apoderado de la demandante manifiesta que remite los documentos solicitados vía telefónica, pero lo hace a la dirección *jcsandra@porvenir.com.co*, esto es, a una que no corresponde a PROTECCION S.A.; debido a este descuido, la solicitud de la pensión de sobrevivientes no quedó formalmente radicada, sin que pueda endilgársele a la demandada una mora en el reconocimiento de dicha prestación ya que previo a ser demandada, no recibió la documentación que requería, confirmándose la Decisión también en este aspecto.

En cuanto a que se condene en costas de Primera Instancia a PROTECCION S.A., esta Sala de Decisión Laboral comparte los argumentos expuestos por *a quo*, referente a que **debido al yerro cometido por el apoderado de la demandante en la radicación de la solicitud de la pensión, la AFP fue**

llamada a juicio sin tener previamente la oportunidad realizar una investigación sobre la procedencia del reconocimiento de la prestación deprecada; si bien la interposición de la demanda genera unos gastos para la parte actora, el descuido en el que incurrió su apoderado, privó a PROTECCIÓN S.A de la posibilidad de poder determinar si había o no lugar al reconocerle la pensión de sobrevivientes, antes de que fuera demandada.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la Sentencia de Única Instancia proferida en el asunto de la referencia.

COSTAS:

No se condena en Costas en esta Segunda Instancia teniendo en cuenta que apelaron ambas partes y ninguno de los recursos prosperó; de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

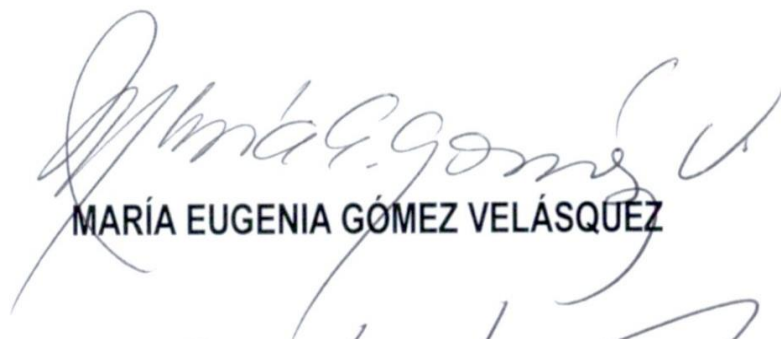
RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA**, la Sentencia de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: No se CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia, según lo indicado en los considerandos.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **MARIA YOLANDA DÁVILA GALLEGO**
Demandada : **PROTECCION S.A.**
Radicado : **05001 31 05 013 2019 00648 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – Pensión de Sobrevivientes causada por muerte de hijo.
Decisión : Confirma Sentencia Condenatoria
Sentencia No : 010

FECHA SENTENCIA:

31 de enero de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy miércoles 01 de febrero de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy
miércoles 01 de febrero de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario